

**Solicitud de medidas urgentes ante la pandemia del Coronavirus
para la atención y priorización de los
pueblos afrocolombianos e indígenas de la región Pacífico**

Bogotá D.C. septiembre 1° de 2020

Honorable Magistrada
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
Sala Especial de Seguimiento Sentencia T-025 de 2004
CORTE CONSTITUCIONAL
Palacio de Justicia Calle 12 No. 7-65 – Piso 2
E. S. D.

Referencia: Solicitud de medidas a la Sala Especial de Seguimiento Sentencia T025 de 2004 en favor de los derechos de los indígenas y afrocolombianos del Pacífico Colombiano ante la llegada de la pandemia del COVID-19.

Respetada Presidenta:

Autoridades indígenas, líderes comunitarios y profesionales comprometidos con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la región del Pacífico nos dirigimos a la Honorable Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, para solicitarle de manera muy especial que exhorte a las autoridades estatales con competencia en el goce efectivo de los derechos fundamentales, adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de las tierras bajas de esta región colombiana y prevenir su exterminio físico y cultural.

El avance del SARS-COVID-19 interviene en unas circunstancias preexistentes de exclusión, discriminación y racismo estructural, incumplimiento de derechos, presencia de actores armados y conflictos socioambientales que ponen en riesgo de exterminio físico y cultural a estas poblaciones, como muy bien lo ha advertido los autos 004 y 005 de 2009, proferido por la honorable Corte Constitucional en el marco de la declaratoria de estado de cosas inconstitucional declarado por el Alto Tribunal mediante Sentencia T-025 de 2004.

Los primeros casos del Covid-19 se reportaron en áreas urbanas y áreas expuestas a la movilidad de sus habitantes. Los pobladores están encarando la pandemia en difíciles condiciones de salubridad: en las áreas rurales las condiciones sanitarias son muy precarias en su infraestructura, en la dotación de equipos, profesionales de la salud, pruebas y medicamentos. En centros urbanos como Quibdó, Buenaventura y Tumaco el nivel de atención hospitalaria está entre el nivel 1 y 2, no se cuenta con la infraestructura necesaria,

dotación de equipos, personal médico, ni medicinas y mucho menos equipos para pruebas rápidas. A esta grave situación se suma la corrupción que es una realidad que aqueja a todo el país. En síntesis, esta región no cuenta con un sistema de salud que pueda hacer frente a las condiciones que trae consigo la pandemia y, como consecuencia, hay un altísimo subregistro de casos, así como una gran desinformación sobre la situación de las poblaciones más vulnerables tanto en las áreas rurales como urbanas y una ausencia de acciones coordinadas que permitan atender la emergencia desde una perspectiva regional.

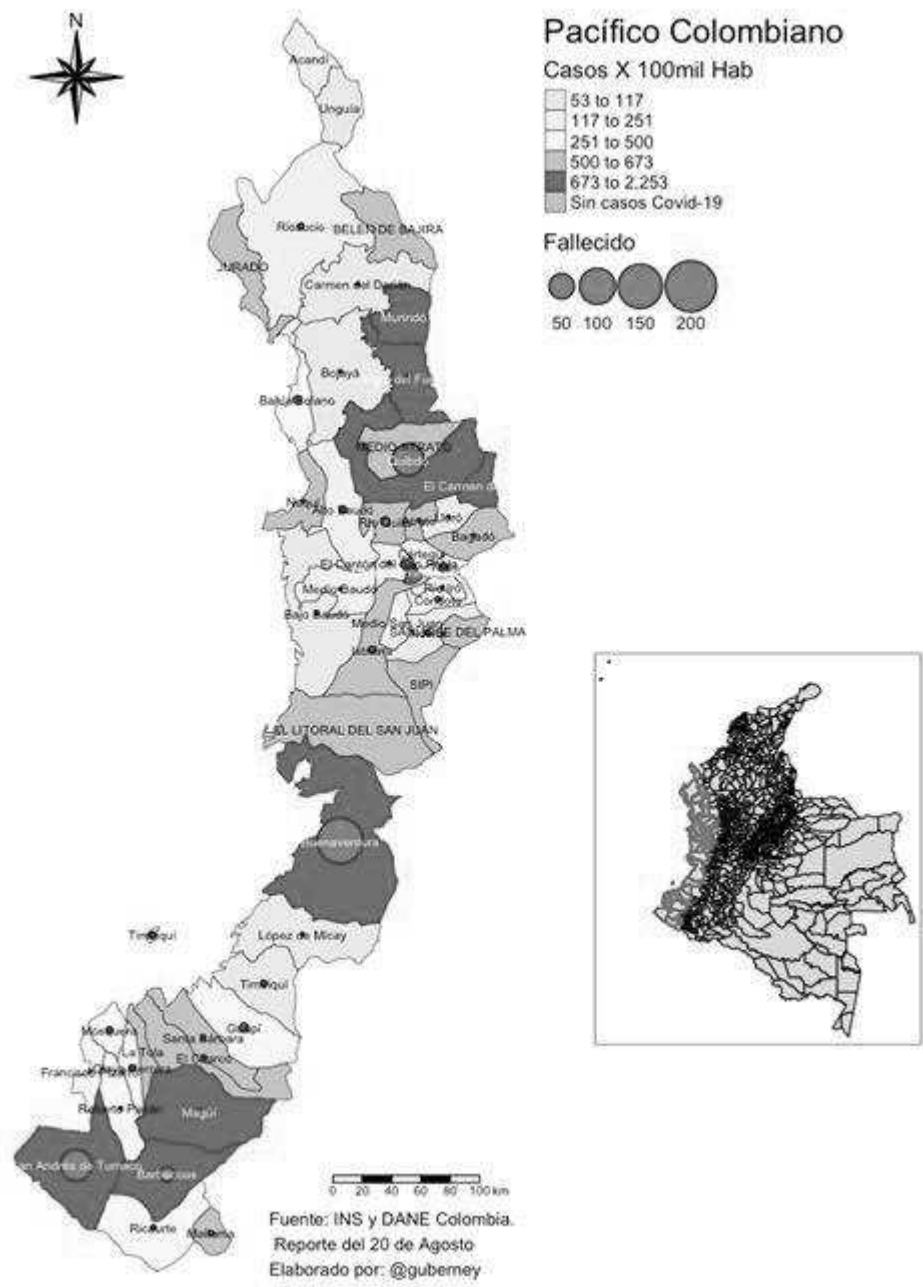
Situaciones que se conjugan y hacen más grave la emergencia sanitaria en el Pacífico tienen que ver con problemáticas preexistentes como bajos índices socioeconómicos, las enfermedades respiratorias y cardiovasculares preexistentes que agravan el efecto del COVID-19, baja capacidad del sistema de salud en la región para hacer frente a las demandas de atención, escasas estrategias de prevención, seguimiento y control de los contagios, la emergencia humanitaria por intensificación de las dinámicas de conflicto armado, la falta de garantía de derechos étnicoterritoriales de las comunidades, la persistencia de economías ilícitas que no han parado en la cuarentena así como las fumigaciones ni los enfrentamientos de la fuerza pública con los grupos armados ilegales. Imposición de controles armados, toques de queda y amenazas para obligar a los pobladores a acatar medidas de aislamiento preventivo hacen parte del día a día. Altas tasas de desempleo e informalidad, dependencia de los centros poblados para abastecimiento de comunidades rurales. A este panorama se suma la inexistencia de una respuesta contextualizada desde perspectivas territoriales y diferenciales de parte del gobierno nacional. Priorizar las regiones y entes territoriales que enfrentan mayores inequidades en la garantía de derechos fundamentales debería ser una premisa de las acciones del gobierno nacional para prevenir que los efectos de la pandemia, articulados a desventajas históricas que el racismo estructural ha configurado, profundicen la vulneración de los derechos de sus pobladores.

La base económica de las sociedades rurales de estas regiones se concentra en prácticas de subsistencia que se alternan con esporádicas participaciones en el mercado. Son regiones altamente vulnerables a las economías ilegales como los cultivos de uso ilícito, la explotación minera y el tráfico de drogas. Los centros urbanos han sido receptores de buena parte de las poblaciones desplazadas por el conflicto, la presencia de grupos armados y las amenazas en sus territorios o personas que han migrado buscando satisfacción a sus derechos, educación, salud, derechos cívicos y empleo, así como una alternativa de huir de las violencias de sus propios lugares de origen. Resulta así comprensible cómo muchas de estas personas migrantes terminan vinculadas a la economía informal, a formas abusivas de explotación en la ciudad que, ante las circunstancias de desprotección, se ven actualmente agravadas por su exposición al contagio sin garantías mínimas de protección para sobrellevar una cuarentena estricta y de verdadero aislamiento.

El Pacífico constituye uno de los mayores territorios del país provistos de la más alta biodiversidad. Justamente por su variedad ecosistémica, hidrográfica y complejidad ecológica, condiciones que deberían promover su cuidado y atención, paradójicamente, la convierten en una región altamente vulnerable a las explotaciones minero-energéticas, a la intervención extractivista y la proliferación de economías ilegales ligadas a dinámicas de violencia y guerra. Sus territorios están altamente amenazados y el confinamiento promovido para evitar la expansión de la pandemia ha favorecido la presencia y tránsito de actores irregulares. La región del pacífico se ha convertido en las últimas décadas en corredor estratégico de economías ilegales (narcotráfico, tráfico de personas) que mantienen flujos

activos tanto en la frontera norte como en el sur. Mientras se restringen las dinámicas de movilidad necesarias para el bienestar de los pobladores, la movilidad de las economías ilegales no cesa, poniendo en riesgo a toda la región. Estos hechos que generan amenazas a la vida social, militarización y control del territorio, ponen en riesgo los modos de vida humanos, las prácticas culturales y tradicionales, y los equilibrios naturales de estos territorios. El ejemplo más abominable de esta situación es el imparable asesinato de líderes sociales, el confinamiento de comunidades rurales, las recientes masacres, la violencia contra las mujeres afro e indígenas en sus territorios, justo en un momento de alta vulnerabilidad ante la letalidad de un virus que es controlado y atendido sin tener en cuenta las diferencias étnicas y territoriales.

De los municipios que se encuentran por encima del promedio nacional en casos de contagio por cada 100 mil habitantes, 24 pertenecen a la región del Pacífico entre ellos las principales ciudades Quibdó, Tumaco y Buenaventura que con otros 18 municipios de la región presentan un promedio de más de 500 contagiados por cada 100 mil habitantes, cifras que deberían alarmarnos si revisamos la falta de infraestructura y las vulnerabilidades preexistentes que reflejan grandes desigualdades sociales.



La pandemia puede significar un verdadero genocidio, pues la presencia de un brote viral se traducirá en una afección general sin condiciones adecuadas de respuesta médica, generando probablemente muertes en los más expuestos, como ancianos y niños. Generalmente los mayores y las mayores, quienes mantienen y transmiten muchos de los saberes ancestrales están en grupo de riesgo, por eso han sido ellos los primeros en morir. Junto con ellos, muere una cultura, una lengua, saberes únicos sobre el manejo de la selva, una forma de ser, estar y actuar en el mundo y toda la humanidad pierde un valor inestimable e irrecuperable.

A continuación presentamos las principales circunstancias que aquejan a cada región en particular y que dan a comprender nuestra profunda preocupación:

PACIFICO NORTE - CHOCÓ - ANTIOQUIA

Descripción general:

El departamento del Chocó cuenta con 30 municipios y está dividido en cinco subregiones Atrato, Darién, San Juan, Baudó y la subregión Pacífica que abarca los municipios del litoral. Según las proyecciones demográficas del DANE (2020), el Chocó cuenta con una población de 544.764 habitantes, de los cuales el 87% es afrodescendiente, el 10% indígena y el 3% mestizos. Cerca del 91% de su superficie se encuentra bajo titulación colectiva, unas 4.363.941 ha, de las cuales 3.068.841 ha (70,32%) corresponden a Comunidades Negras (64 Consejos Comunitarios) y 1.295.080 ha (29,68%) a comunidades indígenas (132 resguardos) de las etnias Embera–Dóbida, Embera–Katío, Embera– Chamí, Wounaan y Tule, ubicados en 24 de los 30 municipios del Chocó; el 9% restante está habitado por población campesina mestiza. Para el Chocó, el índice de necesidades básicas (NBI) es del 82.8%, el más alto del país, dentro del cual cerca del 79% de sus habitantes presenta al menos una NBI¹.

Quibdó es una ciudad que en las dos últimas décadas ha vivido una intensa transformación en el poblamiento al convertirse en una de las principales ciudades receptoras de población desplazada afro e indígenas de la región del pacífico norte. Con 130.825 habitantes (DANE, CNPV2018) presenta un alto índice de población en situación de pobreza: 72.74% (DANE, CNPV2018). La importancia de Quibdó como centro de abastecimiento de bienes y servicios y su alto índice de contagios por COVID en la región, marca una situación de emergencia frente a las restricciones de movilidad en la región. La necesidad de viajar a Quibdó para acceder a atención médica o mercados en el caso de la región del Atrato, mantiene en contacto el principal centro de contagio con las comunidades rurales.

El Chocó es el departamento con el índice más alto de necesidades básicas insatisfechas, desde su creación como departamento en 1947 viene reivindicando el derecho a servicios básicos como agua potable que hoy no se han concretado ni siquiera en su capital. La crisis económica que está generando la emergencia sanitaria profundiza aún más las desigualdades históricas producto del racismo estructural vulnerando los derechos fundamentales de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. La carencia de servicios básicos en la zona urbana y más creciente en la zona rural dificulta la implementación adecuada de las medidas de prevención y bioseguridad. Demandas de derechos fundamentales y cambios estructurales como las realizadas por el paro cívico en 2016 aparecen hoy frente a la pandemia como necesidades urgentes. Entre ellas la garantía del derecho a servicios básicos como agua potable, un hospital de tercer nivel y hospitales para las subregiones del departamento, aún siguen a la espera de su cumplimiento.

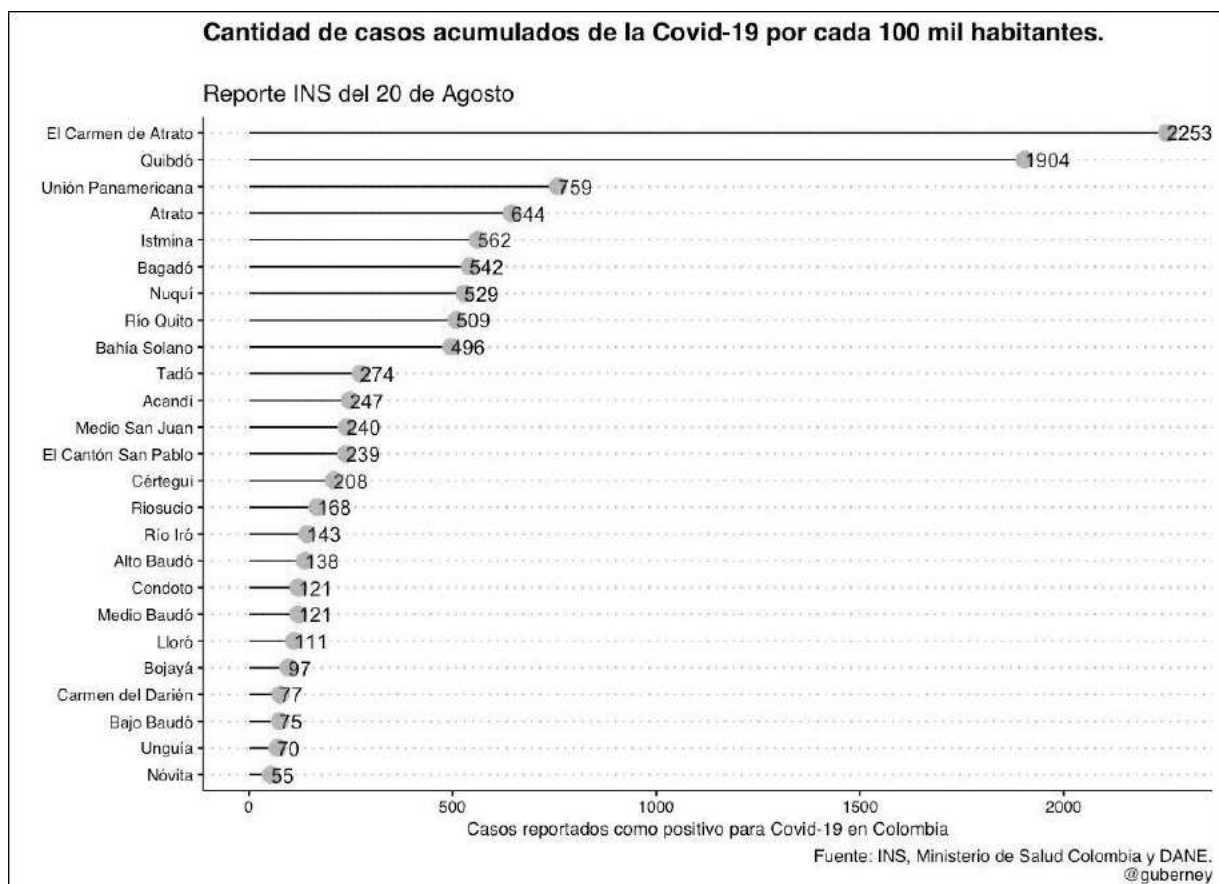
La situación de las familias indígenas y afrodescendientes que viven en situación de desplazamiento en la ciudad de Quibdó es muy grave. La precariedad de los servicios básicos en las zonas de asentamiento, la dependencia de las redes de parientes en otras comunidades, de programas de ayuda humanitaria y del trabajo informal los deja completamente desprotegidos en una ciudad que tiene casi 2483 contagiados (20 agosto). En este contexto es necesario resaltar la situación que viven niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes son las principales víctimas en esta ciudad, son vulnerables al reclutamiento, uso y utilización por

¹ Ver “Situación de la Pandemia por Covid 19 en el Chocó Biogeográfico” Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. IAP, 2020. <https://siatpc.co/wp-content/uploads/Covid-choco-biogeografico.pdf>

bandas y grupos armados que hacen cada vez más presencia en la zona urbana. A esto se suma la estigmatización, especialmente de los jóvenes negros, como jóvenes indisciplinados que están aumentando la vulnerabilidad frente al virus, cuando la situación de violencia, la falta de garantía de sus derechos son los principales elementos que están vulnerando sus vidas.

En el caso de las comunidades rurales la emergencia sanitaria se suma a la emergencia humanitaria por los constantes enfrentamientos y presencia de actores armados. La población civil está en medio de la confrontación armada, se ve afectada por la restricción de movilidad a la vez que es forzada en muchos casos a desplazarse a centros poblados. Hay alto riesgo de reclutamiento, uso y utilización de NNA que es uno de los principales factores detrás de las amenazas a líderes/lideresas y el desplazamiento de las comunidades. Muchas niñas son víctimas del tráfico y la violencia sexual. Como se reporta para varias comunidades indígenas y rurales de las cuencas del Atrato, Baudó y San Juan, la situación de orden público impide que las familias puedan ir a las parcelas en el monte a trabajar poniendo en riesgo su seguridad alimentaria de por sí ya afectada. Frente a esto decidieron hacer mingas de trabajo comunitario para ir por el plátano.

Situación del coronavirus:



En Quibdó para el 20 de agosto los casos confirmados de coronavirus ascendían a 2484 con 77 fallecidos y 89 hospitalizados², mientras la capacidad de camas UCI es de tan solo 24. Como lo evidencia el gráfico 9 municipios del Chocó presentan un promedio de contagios

² <https://pacificotaskforce.com/datos-covid-19-quibdo/>

por cada 100 mil habitantes que supera el promedio nacional de casos (305), entre estos están El Carmen de Atrato y Quibdó como dos casos críticos con 2253 y 1904 casos por cada 100 mil habitantes respectivamente. En algunos municipios como Unión Panamericana, Atrato, Bagadó, Istmina y Nuquí los casos han aumentado exponencialmente en el último mes. Por su parte los municipios de Murindó y Vigía del fuerte del departamento de Antioquia se encuentran por encima del promedio nacional en tasa de contagios por cada 100 mil habitantes, en el mes de julio el personero de Murindó denunció brotes del virus en el municipio y falta de recursos para atender la emergencia.

La situación de precariedad en servicios básicos, se suma a una situación de atención en salud con problemas estructurales, en Chocó solo existe un hospital de segundo nivel. La mayoría de los pacientes están siendo trasladados a ciudades como Medellín. La ciudad debió ampliar su cementerio debido al aumento de muertes por Covid-19 sumado a las muertes de jóvenes en medio del conflicto armado.

Estadísticos de los municipios del Pacífico Norte							
Datos reportados por INS Colombia el 20 del Agosto de 2020							
Ciudad.de.ubicación	Población2020	CasosTotales	CasosX100milHab	Fallecidos	Hospital_UCI	TasaMortXMillónHab	TasaLetalidad
Quibdó	130825	2491	1904.07	77	15	588.57	0.031
El Carmen de Atrato	8212	185	2252.80	0	1	0.00	0.000
Istmina	30806	173	561.58	4	0	129.84	0.023
Riosucio	55232	93	168.38	3	0	54.32	0.032
Nuquí	16642	88	528.78	1	0	60.09	0.011
Murindó	5234	83	1585.79	0	0	0.00	0.000
Vigía del Fuerte	9423	68	721.64	2	0	212.25	0.029
Bagadó	11262	61	541.64	1	0	88.79	0.016
Unión Panamericana	6982	53	759.09	5	0	716.13	0.094
Bahía Solano	10279	51	496.16	5	1	486.43	0.098
Tadó	17913	49	273.54	6	0	334.95	0.122
Río Quito	8448	43	509.00	6	0	710.23	0.140
Atrato	6208	40	644.33	1	0	161.08	0.025
Alto Baudó	28293	39	137.84	4	1	141.38	0.103
Acandí	14159	35	247.19	0	0	0.00	0.000
Medio San Juan	10826	26	240.16	0	0	0.00	0.000
Bajo Baudó	30472	23	75.48	1	0	32.82	0.043
Medio Baudó	15683	19	121.15	1	0	63.76	0.053
El Cantón San Pablo	6286	15	238.63	1	0	159.08	0.067
Condoto	12367	15	121.29	2	0	161.72	0.133
Carmen del Darién	19509	15	76.89	1	0	51.26	0.067
Bojayá	12326	12	97.36	1	0	81.13	0.083
Cértégui	5760	12	208.33	0	0	0.00	0.000
Lloró	9913	11	110.97	1	0	100.88	0.091
Unguía	12822	9	70.19	0	1	0.00	0.000
Río Iró	5592	8	143.06	1	0	178.83	0.125
Nóvita	9105	5	54.91	3	0	329.49	0.600

Fuente = Instituto Nacional de Salud de Colombia -INS-, DANE.

Las medidas de aislamiento preventivo y las restricciones de movilidad no logran ser medidas eficientes en los territorios que subsisten del día a día. Es urgente adecuar las medidas de prevención desde un enfoque localizado, esto es lo que evidencia principalmente la situación de la ciudad de Quibdó. El 5 de julio el Ministerio del Interior ordenó medidas especiales para la ciudad, sin embargo, estas medidas se concentran en restricciones, toques de queda y no se traducen en programas estructurales para llevar agua potable, saneamiento básico o fortalecer acciones para garantizar alimentación o una renta básica a los habitantes de una ciudad que vive el 80% de la informalidad.

No existe aún una estrategia regional efectiva para hacer diagnósticos oportunos. Especialmente no hay un diagnóstico de lo que está sucediendo en las comunidades rurales más distantes y las comunidades indígenas. Este es uno de los retos y acciones urgentes que deberían ser atendidas por las instituciones. El día 21 de julio las comunidades Embera del Carmen de Atrato bloquearon la carretera Quibdó Medellín en protesta por la falta de atención de las instituciones ante la emergencia sanitaria y las consecuencias que tiene en su subsistencia las medidas de aislamiento preventivo. Denunciaron además que en el resguardo indígena el 18, existen 12 casos de coronavirus que no han sido atendidos por las autoridades de salud.

Según testimonios de líderes indígenas del municipio de Bojayá se manifiesta que en las comunidades hay muchas enfermedades pero como no existen diagnósticos no hay claridad si se trata de Coronavirus. Denuncian que en sus comunidades no existe ningún acceso a servicios de salud, no hay promotores. La gente está enferma y no sabe muy bien a dónde acudir. Las comunidades afrodescendientes en zona rural de ese mismo municipio manifiestan que hay una virosis, algunos enfermos de gripa que se han tratado con plantas medicinales, pero no existen diagnósticos que hayan confirmado si esas personas tienen COVID.

En este sentido, la falta de diagnósticos y realización de pruebas para dimensionar la incidencia de la pandemia en la región es considerada como uno de los principales bloqueos institucionales para atender la emergencia, así como la falta de infraestructura de salud para la atención de los pacientes. Los pacientes son remitidos a otras ciudades y las pruebas de coronavirus deben ser procesadas igualmente en otras ciudades retardando la entrega de resultados y el control de los contagios. Las autoridades municipales se encuentran trabajando con muy pocos recursos, poniendo todo los esfuerzos para superar obstáculos estructurales como la respuesta descontextualizada de las EPS, la falta de infraestructura y la ausencia de un plan estratégico regional que permita articular a las diferentes autoridades e instituciones alrededor de la protección de la vida.

A la suma de situaciones de emergencia que vive el Pacífico, uno de los bloqueos institucionales que viene siendo objeto de fuertes demandas de organizaciones sociales y autoridades étnicas en la región, es la negación por parte del gobierno a reanudar los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Esta situación ha desencadenado una serie de enfrentamientos, reclutamientos, asesinatos, desplazamientos forzados y confinamiento que tienen a todas las comunidades rurales del departamento del Chocó en una emergencia humanitaria.

En el mes de junio fue asesinado un líder, docente indígena en el Bajo Baudó. El 16 de julio fue asesinada Luz Elena Caizamo Rojas niña embera de 9 años por enfrentamientos entre el

ELN y las AGC en la Comunidad indígena del corregimiento de Geando en el Alto Baudó donde aproximadamente 319 habitantes habían retornado hacía poco a su territorio y hoy se enfrentan nuevamente al desplazamiento forzado. El 11 de agosto fue asesinado Patrocinio Bonilla, líder afrocolombiano en él también en el Alto Baudó. Los enfrentamientos con el ejército que se han registrado en el Bajo San Juan en la comunidad de la Peñita, también están vulnerando los derechos de la población civil y complejizando la emergencia sanitaria. La presencia de estos actores armados tanto legales como ilegales se puede convertir en una vía de contagio del coronavirus para estas comunidades indígenas y afro.

Las comunidades Embera de Nuevo Olivo en el río Uva en Bojayá se desplazaron en las primeras semanas del mes de julio. Mientras las comunidades indígenas en el río Opogadó las comunidades se encuentran confinadas. Como lo manifiesta un líder indígena de Bojayá “Llega el ejército, seguridad una semana dos y se van. Pero la gente mientras tanto sigue sufriendo de hambre, enfermando. Hay mucho sufrimiento físico y psicológico”. Ante este panorama el 27 de julio la FEDEOREWA emitió una alerta sobre el confinamiento de 289 familias Embera Dobida del resguardo Alto Río Bojayá por enfrentamientos entre el ejército nacional y el ELN.

Los daños que está causando en las comunidades indígenas y afro esa intersección entre violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado y la violación a derechos fundamentales en el contexto de la pandemia, se refleja igualmente en la grave situación de los indígenas embera desplazados en ciudades como Bogotá y Medellín, experimentando brotes de contagio colectivo, familias en situación de calle y desnutrición de niños y niñas.

PACÍFICO SUR: VALLE, CAUCA, NARIÑO

Descripción general

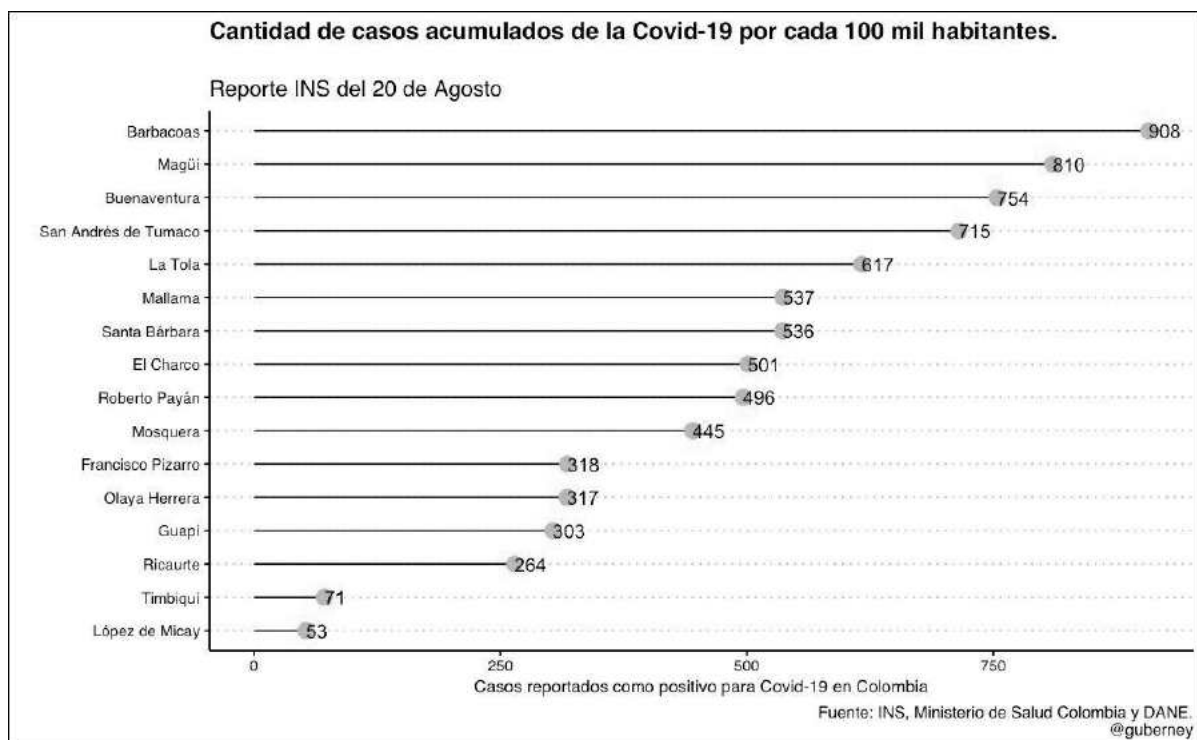
En el Departamento de Nariño son 10 los municipios ubicados en la Costa Pacífica, con una población de 438.880 habitantes (DANE, 2018). Una región fuertemente azotada por el conflicto armado y sus consecuencias, situación que ante la emergencia sanitaria por Covid-19, no se ha detenido. Al contrario, esta situación ha sido aprovechada por los diferentes grupos armados ilegales y los grupos asociados a la cadena del narcotráfico, para incrementar sus acciones violentas contra el territorio y sus habitantes.

En el departamento del Cauca tres municipios se reconocen como parte del pacífico sur, Timbiquí, López de Micay y Guapi. Timbiquí tiene una población de 26.607 habitantes, López de Micay 18.932 habitantes y Guapi cuenta con 27.696 habitantes. Su conectividad exclusivamente por vía marítima y aérea. Estos municipios tienen una precaria cobertura de servicios de saneamiento básico y un alto índice de necesidades básicas insatisfechas. Solo cuentan con un centro de salud de nivel 1 y enfrentan un riesgo en la propagación del virus debido a la conectividad y dependencia existente vía marítima con ciudades como Buenaventura donde existe una alta tasa de contagio del virus.

Las precarias condiciones en las que vive la población de Buenaventura, con 432.501 habitantes (según proyecciones del DANE 2019) se dieron a conocer en la historia reciente por el paro cívico del año 2017, han estado presentes desde la conformación misma de la

ciudad y en el año 1964 originó el primer paro cívico, así como la lamentable tradición de establecer acuerdos que posterior al cese del paro no se cumplen a cabalidad por parte del gobierno de turno. Para inicios del 2017, el 64% de la población en Buenaventura vive en condiciones de pobreza, el 9,1% en condición de miseria, el 62% de la población y la mitad de la población se reconocía como víctima del conflicto y se cerró el único hospital del municipio. Las demandas del paro cívico incluyen medidas para la salud, la educación, el empleo, protección de los derechos étnico-territoriales, el acceso a la justicia, protección y asistencia a las víctimas del conflicto, medidas de protección individual y colectiva para los y las líderes sociales y reparación colectiva para los sujetos colectivos. Sin embargo, el avance con el cumplimiento de los acuerdos ha sido mínimo. Se ha visto una reconfiguración y profundización del conflicto en el territorio produciendo desplazamientos, confinamientos, amenazas, asesinatos y reclutamiento, uso y utilización de NNA. Es preocupante que debido al aumento de riesgo, muchas de las víctimas ya ni denuncian o declaran en caso de desplazamiento entonces se desconoce la real magnitud y gravedad de la situación. El reciente ataque de bomba contra las instalaciones de la alcaldía es evidencia de la amenaza continua al proceso político del paro cívico y el movimiento social de Buenaventura.

Situación del Coronavirus



La situación del COVID 19 en del Pacífico sur evidencia un comportamiento de una alta tasa de contagios en 13 de los 16 municipios donde esta tasa supera la del promedio nacional. Este panorama se ha agravado rápidamente en el mes de agosto en municipios como Barbacoas y Mangüi que al 20 de agosto presentan un promedio de contagios mayor que las ciudades de Buenaventura y Tumaco. Esta situación que de por sí es grave se deduce de los datos disponibles frente a una realidad de falta de pruebas y precariedad en el seguimiento a los contagios en la región denunciada por las autoridades municipales, étnicas y organizaciones

regionales. Así como en el departamento del Chocó, la situación histórica de pobreza de los municipios del Pacífico sur, la continuidad del conflicto armado y la ausencia de una infraestructura adecuada para prevenir y atender la emergencia, hacen aún más crítica la situación.

La sociabilidad local descrita como “de puertas abiertas”, que hace referencia a lazos de parentesco extendidos, dependencia de redes de solidaridad e intercambio e interacciones fluidas entre familias y vecindades ha generado ambientes más propicios para un alto contagio y un rápido esparcimiento del virus. En ese sentido han faltado más campañas de pedagogía social que permitan crear mecanismos de evitación del contagio desde las mismas comunidades y en diálogo con las directrices institucionales. Esto ha generado una mayor estigmatización y crítica de los grupos sociales, inhibiendo la generación de más diálogo y construcciones conjuntas para enfrentar la pandemia.

En el municipio de Tumaco y los municipios de esta zona del Pacífico, persiste el enfrentamiento entre grupos armados ilegales en la disputa por las rutas del narcotráfico, dejando población civil afectada por hostigamientos, asesinatos, amenazas, reclutamiento forzado y desplazamiento forzado. Por otro lado, desde el Ministerio de Defensa se ha decidido mantener operativos de erradicación forzada de coca, lo que ha dejado como consecuencia protestas indígenas y campesinas y enfrentamientos con la fuerza pública.

En lo corrido del año 2020 se han asesinado 9 líderes sociales, integrantes de Consejos Comunitarios y del pueblo Indígena AWA. Situación que se ha venido complejizando en los meses de aislamiento preventivo por Covid-19. La Unidad Territorial AWA de la zona del Telembi, viene denunciado hechos como: “El 28 de julio, en la comunidad San Francisco, del resguardo Ñambí Piedra Verde, ubicada sobre la vía Junín – Barbacoas, siendo aproximadamente las 8:00 Pm, pobladores de este sector reportaron el ataque armado contra una casa, donde se conoce de dos personas fallecidas. Estos hechos de violencia se suman a otros en la Zona Telembí Awá y en la Asociación Unipa, quienes han denunciado que en meses recientes, actores armados han atacado estos territorios colectivos, generando zozobra entre los habitantes”. Estas comunidades están atravesando por una difícil situación de crisis humanitaria y alta vulnerabilidad social, económica y cultural, que se incrementa con el confinamiento en razón de la pandemia por Covid-19.

En relación con la infraestructura hospitalaria, el municipio de Tumaco cuenta con dos hospitales, Centro Hospital Divino Niño de Nivel 1, El Hospital San Andrés y La Clínica Puente del Medio Nivel 2, en los cuales no hay UCI. Los nueve municipios restantes de la zona pacífico nariñense cuentan con E.S.E de primer nivel. En municipios como Magüí Payán se ha reportado contagio del personal de salud, hecho que agrava la situación dentro de este municipio que se encuentran a aproximadamente siete horas de la ciudad de Pasto y a tres horas de la ciudad de Tumaco, por vía terrestre en regular estado.

Se desconoce la situación de la pandemia y números de casos dentro de la población que habita en los sectores rurales más alejados de los centros urbanos, de quienes no se cuenta con información verídica. En ese sentido se requiere levantar una base de datos fiable, que permita emprender acciones a favor de la salud y la vida de estas comunidades de población afro e indígena. Igualmente fortalecer estas iniciativas locales que no son suficientes.

En Buenaventura el año 2020, llamado en las calles de la ciudad el año del Covid, entre los líderes sociales asesinados y perseguidos se encuentran líderes del paro cívico, el narcotráfico y la delincuencia no da tregua llegando al extremo de suceder el atraco del Barco Hospital San Raffaele que presta servicios de salud en el Pacífico, en el momento actual en el que más se requiere atención.

Como ha sucedido a nivel de toda la región Pacífico las condiciones derivadas por la pandemia han agravado el ya crítico estado de Buenaventura, al 17 de agosto se diagnosticaron entre zona urbana y zona rural 2.345 casos positivos para Covid-19 y 156 fallecidos³, cifra que si bien es alarmante, siendo la segunda más alta del departamento del Valle del Cauca, es mucho menor a la posible dimensión real de los contagios. La falta de confianza en los servicios de salud que existen significa que muchas personas no acuden a la clínica en caso de síntomas. La población en situación de desplazamiento en la zona urbana de Buenaventura, que es alrededor de 80% del total de las víctimas en el distrito, tiene alta vulnerabilidad de contagio.

Si bien en los municipios del Cauca, Guapi, Timbiquí, López de Micay, la tasa de contagios no ha sido tan elevada, el 30 de mayo COCOCAUCA⁴ hizo un llamado alertando sobre la crisis humanitaria que viven las comunidades afro e indígenas en este territorio, situación que se ha agravado durante el tiempo de confinamiento y emergencia sanitaria por Coronavirus. Desplazamientos masivos a ciudades como Popayán, Cali y Buenaventura (se han dado desplazamientos forzados masivos en el mes de marzo, abril), enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN, asesinato de líderes sociales, confinamiento de las comunidades de la parte alta del río Saija. Lo que estas autoridades describen como un “doble confinamiento” por actores armados y por las medidas de aislamiento preventivo instauradas por el gobierno tiene a las poblaciones frente a una situación crítica de abastecimiento y abandono: “Los hechos de los últimos 17 meses muestran el grado de recrudecimiento del conflicto armado en la costa pacífica del Cauca, que se sigue recrudeciendo cada día más. Con gran preocupación observamos, que los actores armados se aprovechan de la actual crisis del coronavirus. En este sentido han estado circulando panfletos y videos que buscan justificar sus acciones violentas y atemorizar a la población, con el propósito de controlar los territorios” (COCOCAUCA)

³ <https://pacificotaskforce.com/datos-covid-19-buenaventura/>

⁴

<https://cococauca.org/2020/05/29/cococauca-alerta-alarmanente-crisis-humanitaria-por-recrudecimiento-del-conflicto-armado-en-la-costa-pacifica-del-cauca/>

Estadísticos de los municipios de Pacífico Sur

Datos reportados por INS Colombia el 20 del Agosto de 2020

Ciudad.de.ubicación	Población2020	CasosTotales	CasosX100milHab	Fallecidos	Hospital_UCI	TasaMortXMillónHab	TasaLetalidad
Buenaventura	311827	2351	753.94	156	18	500.28	0.066
San Andrés de Tumaco	257052	1838	715.03	74	9	287.88	0.040
Barbacoas	56526	513	907.55	16	2	283.06	0.031
Magüí	25543	207	810.40	2	1	78.30	0.010
El Charco	22550	113	501.11	2	1	88.69	0.018
Guapí	27696	84	303.29	6	2	216.64	0.071
Olaya Herrera	25210	80	317.33	3	0	119.00	0.038
Santa Bárbara	13242	71	536.17	1	0	75.52	0.014
Roberto Payán	12694	63	496.30	1	0	78.78	0.016
Mosquera	12582	56	445.08	3	0	238.44	0.054
Ricaurte	20057	53	264.25	2	0	99.72	0.038
Mallama	8946	48	536.55	2	0	223.56	0.042
La Tola	7460	46	616.62	0	0	0.00	0.000
Francisco Pizarro	14158	45	317.84	1	0	70.63	0.022
Timbiquí	26607	19	71.41	3	0	112.75	0.158
López de Micay	18932	10	52.82	1	1	52.82	0.100

Fuente = Instituto Nacional de Salud de Colombia -INS-, DANE.

Recogemos aquí el llamado concreto del PCN Proceso de Comunidades Negras en abril del presente año donde destacan entre las afectaciones diferenciales en el marco de la emergencia sanitaria: aumento del estigma de las comunidades negras, desconocimiento de las prácticas de cuidado ancestrales, afectaciones culturales por interrupción de ritos fúnebres, control de la vida cotidiana por estado y grupos armados, deterioro de proyectos colectivos y profundización de la pobreza.

“Para responder a esta emergencia de salud pública en el litoral pacífico colombiano, el alcalde de Buenaventura, presentó al gobierno nacional la iniciativa de creación de una gerencia del pacífico para la atención del COVID -19, dado que la pandemia se ha convertido en una problemática que se suma y agrava la situación que cercenan el proyecto de vida colectivo de las comunidades negras del pacífico colombiano: no es posible afrontar efectivamente esta pandemia con un sistema de salud altamente precario, sin agua potable, con presencia de grupos armados ilegales y con territorios plagados de cultivos de uso ilícito y minería con maquinaria amarilla; siendo estas dos últimas problemáticas factor causal de deterioro del proyecto de vida colectivo de las comunidades negras a través del confinamiento de los pobladores del pacífico colombiano mucho antes del coronavirus, restringiendo ilegalmente pero de manera efectiva las prácticas de producción agrícolas, pecuarias, de pesca artesanal y minería tradicional, e imponiendo a sangre y fuego economías extractivas” (PCN, Informe DDHH, abril 2020).

ASOCIACIONES INVOLUCRADAS Y FORMAS DE MOVILIZACIÓN Y RESPUESTA LOCALES.

Organizaciones sociales de los municipios han activado sus capacidades y potencialidades para atender la emergencia sanitaria, valiéndose de su cultura y sus conocimientos ancestrales en términos de medicina tradicional.

Una primera reacción de la comunidad fue la escasa credibilidad de la presencia y los efectos del COVID-19. La mayoría de la población asociaron el contagio con una gripe, conocida como quiebra de huesos. En consecuencia se trata la enfermedad con medicina tradicional como la Matarratón, una planta a la cual se le atribuyen propiedades curativas. También se ha incrementado el consumo de jengibre y medicamentos antigripales. Aguas calientes, limoncillo, canela, panela. Se utiliza el Agua de sal y el agua oxigenada para hacer enjuagues bucales.

Acciones conjuntas entre el colectivo de Jóvenes de Tumaco, gestores culturales y voluntarios, se han dirigido a producir piezas comunicativas para difundir mensajes que promuevan el autocuidado y la protección colectiva frente a las distintas formas de contagio, enfatizando en la responsabilidad social, el “distanciamiento físico más no distanciamiento emocional / comunitario”. Este grupo de jóvenes se ha articulado con la iniciativa “Nariño Somos Todos” un grupo de personas interesadas en gestionar ayudas, principalmente de insumos hospitalarios para las regiones más apartadas de este territorio. Desde esta iniciativa se está apoyando acciones encaminadas a la autoprotección, el autocuidado y procesos de promoción cultural y gastronómica a través plataformas virtuales. El incremento de este tipo de acciones desarrolladas desde la sociedad civil organizada, ha conllevado una disminución de los contagios.

Durante los meses de abril, mayo y junio en algunas zonas rurales, las comunidades establecieron controles estrictos en la entrada de cada vereda y se regulaba la salida de los integrantes de las familias. En algunos sectores rurales se ha fortalecido el trabajo comunitario y la unión de esfuerzos para prevenir el contagio.

También se han generado iniciativas comunitarias solidarias como las desarrolladas por colectivos de mujeres dirigidas a asegurar la producción y donación de tapabocas, liderado por el colectivo de Artesanías Choibá; y la venta de plátano a bajos precios, liderada por las mujeres de Bojayá que hacen parte de la asociación de productoras Aplameda. La activación de redes de cuidado y protección de mujeres en riesgo o víctimas de violencia intrafamiliar. Las organizaciones de jóvenes universitarios y de mujeres en Nariño han emprendido acciones de recolección de alimentos para distribuirlos entre las comunidades más vulnerables.

En el distrito de Buenaventura los consejos comunitarios de las cuencas organizaron una gran donación con entregas de productos agrícolas desde la zona rural para la población en la zona urbana acción que pone en evidencia la importancia de garantizar los derechos étnicoterritoriales de las comunidades como es la soberanía alimentaria.

Alianzas interinstitucionales y regionales

A falta de una respuesta coordinada para la región de parte de las instituciones del gobierno nacional, diferentes organizaciones, entes territoriales, universidades y organizaciones étnicas

se han articulado para emprender estrategias de largo alcance con enfoque diferencial y territorial.

La iniciativa Pacífico Task Force es una alianza para enfrentar el COVID 19 en toda la región del Pacífico colombiano. Esta alianza financiada con fondos internacionales está realizando un trabajo importante de articular autoridades locales, organizaciones comunitarias y autoridades étnicoterritoriales con una perspectiva regional que aborda el Pacífico colombiano como un continuo para hacer frente a la fragmentación administrativa que impone la división departamental. En la primera fase está centrada en las ciudades de Quibdó, Buenaventura, Tumaco y el municipio de Timbiquí. Esta alianza busca organizar acciones estratégicas que tengan incidencia en la intervención institucional y contribuyan a fortalecer capacidades en la comunidad. La alianza emplea un enfoque estructural diferencial, alrededor de cinco líneas de trabajo orientadas a atender las necesidades de prevención y control en relación con la pandemia: Seguridad alimentaria. Salud e higiene. Sistema de inteligencia epidemiológica. Educación. Adaptabilidad comunitaria” <https://pacificotaskforce.com/>

En esta alianza participan actores locales tan importantes como el PCN proceso de Comunidades Negras, el comité del paro cívico de buenaventura (CPCB), El CONPA el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano y centros de pensamiento como el CEAF Centro de Estudios Afrodiaspóricos del ICESI. En diferentes espacios los líderes de esta alianza han realizado llamados para que el gobierno nacional se sume a su trabajo sin tener respuestas positivas.

En un comunicado conjunto⁵ desde la Alianza Pacifico task force, las alcaldías de Buenaventura, Tumaco, Quibdó y Timbiquí hacen un llamado de urgencia ya que, a pesar de las orientaciones del nivel nacional y los protocolos de INS apuntan a realizar diagnósticos oportunos, a nivel regional existe un bajo nivel en la operación de las EPS lo que ha profundizado las inequidades preexistentes. En este llamado exigen a las autoridades competentes:

- implementación de las medidas que las Empresas Administradoras de planes de beneficios deben asumir por ley para garantizar el derecho a la salud de la población del litoral Pacífico
- Seguimiento, por parte de los organismos de control, a las Empresas Administradoras de planes de beneficios.
- Disponer laboratorios locales con la capacidad requerida para atender la demanda creciente de pruebas en la población del Pacífico.
- Reunión con el ministerio de salud y el ministerio del interior para concertar acciones inmediatas.

En el Chocó se han realizado alertas conjuntas a través de comunicados como el emitido el 6 de julio por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato – COCOMACIA, la Mesa Indígena del Chocó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y la Mesa Territorial de Garantías Chocó y la Diócesis de Quibdó.

5

<https://www.facebook.com/notes/pac%C3%ADfico-task-force/enfrentando-la-pandemia-del-covid-19-e-n-el-litoral-pac%C3%ADfico-colombiano/156888569370195/>

Se han llevado a cabo acciones impulsadas por la Diócesis de Quibdó como campañas de donación y la estrategia “Respuesta frente al COVID en el Chocó”, donde se desarrollan mecanismos de apoyo territorial psicosocial para generar respuestas colectivas ante la crisis de la pandemia en grupos aislados y vulnerables del departamento. Dicha estrategia consiste en apoyar a las “redes de apoyo” como agentes de pastoral y líderes que acompañan a diario a las comunidades. Esta estrategia es financiada por la Universidad de Glasgow y SCIAF - Agencia de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria de la Iglesia Católica de Escocia.

El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, FISCH, ha emprendido acciones para diseñar un plan de acción que articula la medicina tradicional y la medicina occidental, promueve estrategias de autocuidado y retoma apuestas de soberanía alimentaria. Desde estos ejes han realizado acciones en las 5 subregiones del departamento del Chocó.

Como lo plantea el Proceso de Comunidades Negras PCN en su informe de Derechos Humanos del mes de julio “Es vital que el Gobierno colombiano realice decretos con enfoque diferencial étnico en el marco de la pandemia, para proteger y cuidar los derechos de la población afro y por ende proteja la diversidad étnica y cultural del país. La pandemia no puede erradicar las prácticas y valores culturales de los pueblos, es posible y necesario pensar en medidas excepcionales para preservar la integridad cultural como un derecho fundamental de los pueblos”.

Los aquí firmantes solicitamos a la Corte que exhorte al Gobierno Nacional y a los gobiernos territoriales, en el marco del sistema de corresponsabilidad, a adoptar un conjunto de medidas que permitan atender de manera diferenciada y adecuada a la población víctima en razón de sus vulnerabilidades particulares y en atención de los impactos sanitarios, sociales, económicos y psicosociales previsibles que plantea la nueva situación.

Medidas emergenciales a corto y mediano plazo

- Que las instituciones competentes del gobierno nacional se articulen a las iniciativas regionales que están en marcha impulsando acciones diferenciadas para atender la emergencia por Coronavirus tales como la Alianza Pacífico Task Force y las articulaciones regionales como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Las diócesis del Pacífico colombiano, Nariño Somos Todos, entre otras.
- Garantizar el derecho al servicio de agua potable para la región Pacífico como medida urgente de salud preventiva y recurso común necesario para mantener la higiene básica y prevenir los contagios
- Disponer laboratorios locales con la capacidad requerida para atender la demanda creciente de pruebas en la población del Pacífico
- Garantizar atención de tercer nivel en las tres principales ciudades de la región Quibdó, Buenaventura y Tumaco.
- Realizar brigadas de salud a los territorios de las comunidades indígenas y los consejos comunitarios de comunidades negras que alerten sobre la necesidad de atención urgente en salud.
- Suministro de materiales de bioseguridad en centros de salud y garantía de los derechos laborales de los empleados de este sector.
- Abastecimiento de víveres para satisfacción de necesidades básicas en condiciones de aislamiento preventivo.

- Fortalecimiento de iniciativas de prevención y cuidado desde la medicina tradicional de los pueblos afrodescendientes e indígenas.
- Atención urgente a las familias que se encuentran en asentamientos temporales por desplazamiento forzado así como a las familias que han denunciado confinamiento por actores armados.
- Atención focalizada a la población de niños, niñas, jóvenes y adolescentes para garantizar su acceso a la educación.
- Apoyar iniciativas de soberanía alimentaria en los contextos rurales.
- Atender al llamado de las organizaciones de toda la región de realizar un “ACUERDO HUMANITARIO YA”.
- Garantías para la supervivencia de la comunidad indígena AWA en el departamento de Nariño, población fuertemente afectada no solamente por la pandemia, sino además por el incremento de hechos de violencia sistemática.

Medidas Emergenciales a largo plazo

La emergencia ha develado la enorme deuda en el campo de la salud y los servicios básicos en toda la región. Los llamados han sido históricos y el gobierno ha firmado compromisos recientes con los comités del paro cívico que a la fecha no han sido cumplidos. Exhortamos al gobierno a que cumpla esos compromisos y avance en el trabajo de cerrar las brechas históricas que reproducen violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos afrodescendientes e indígenas en el Pacífico colombiano.

De la misma manera, se requiere implementar medidas efectivas para disminuir los altos índices de violencia que afectan al territorio, vulnerando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, situación que se incrementa ante una emergencia sanitaria como la actual. En este sentido, se solicita la implementación de los Acuerdo de Paz y junto con éstos, acciones de inversión social en salud, educación, economías locales, soberanía alimentaria, entre otras acciones contempladas en el mencionado acuerdo.

Esperamos que estas sugerencias sean atendidas y contribuyan a generar estrategias que garanticen la integridad, la vida, la salud y el bienestar de las comunidades del Pacífico Colombiano. Que estas medidas permitan la satisfacción de los derechos fundamentales que están siendo duramente afectados en medio de la difícil situación de salud pública y recrudecimiento del conflicto armado en la región.

Quedamos a la espera de su amable respuesta,

ESTE DOCUMENTO LO SUSCRIBEN:

AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES DEL PACÍFICO COLOMBIANO

Proceso de Comunidades Negras PCN

Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó

Coordinación Regional del Pacífico

Comisión Interétnica de la verdad de la Región Pacífico

Foro Interétnico Solidaridad Chocó

Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera - Tumaco

Consejo Comunitario Local de Pogue. Bojayá

Consejo General de la costa Pacífica del Norte Los Delfines. Bahía Solano y Juradó

Consejo comunitario Mayor de Juradó

Consejo Comunitario San Andrés de Usaragá. Bajo Baudó

Consejo Comunitario Río Pilizá. Bajo Baudó

Consejo Comunitario Sivirú. Bajo Baudó

Consejo Comunitario del Río Curvaradó. Riosucio.

Consejo Comunitario La Plata Bahía Málaga. Buenaventura.

Asociación Rural de Desplazados de Riosucio (ASORUDE)

Asociación de los Consejos Comunitarios de Riosucio (ACAMURI)

Mujeres Nariñenses por la Paz.

Fundación Mujer y Vida. Quibdó

Artesanas Guayacán. Bojayá.

Grupo de Cantadoras de Bojayá.

Gerardo Dogirama Conchave. Gobernador de la comunidad indígena Santa Maria de Condoto. Alto Baudó

Cristian Conchave. Docente de la comunidad indígena Santa Maria de Condoto. Alto Baudó

Biyán Isarama Conde. Gobernador de la comunidad indígena Cristiano, Alto Baudó

Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa.

Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana-CEPAC/Buenaventura

Leyner Palacios Asprilla. Comisión Interétnica de la Verdad Región Pacífico.

Héctor Fabio Micolta Caicedo. Comisión Interétnica de la Verdad Región Pacífico.

Pedro Victor Guevara. Corporación Mamuncia y Cacumen. Buenaventura

Leonidas Valencia. Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó "ASINCH"

Aurora Bailon. Seglares Claretianas del Medio Atrato.

Movimiento Meta. Tumaco

Aglojoventes Nariño

Alianza Tumaco 2030

Fundación Arcoiris. Tumaco.

Asociación de Recicladores de Timbiquí Jóvenes Empuja

Programa de Desarrollo y Paz del Sur del Chocó Ciederpaz

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Marco Romero Silva, Director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHES; profesor del departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia

Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos. Universidad Javeriana.

Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia

Grupo de Estudios Afrocolombianos - Centro de Estudios Sociales. Universidad Nacional de Colombia

Fundación Tortugas del Mar

Jenzera ONG

Fundación Mareia

ACPO Acción Cultural Popular

R&E Ocean Community Conservation

France Amerique latine

Hijos e hijas por la memoria y contra la Impunidad

ACADÉMICAS/OS, INVESTIGADORAS/ES Y PROFESIONALES

Natalia Quiceno Toro. Profesora e investigadora. Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia.

Alba Jakeline Ruano Jiménez. Docente Investigadora de la Universidad de Nariño.

Guberney Muñeton Santa. Profesor e investigador. Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia.

Raúl Alejandro Delgado. Antropólogo. Estudiante de doctorado en Antropología Social Museu Nacional. Universidad Federal de Rio de Janeiro.

Victoria Eugenia Cifuentes. Antropóloga. Universidad de Antioquia.

Esther Ojularí. Coordinadora Regional-Buenaventura -Codhes.

Wisthon Andrés Abadía. Antropólogo. Magister en Salud Pública. Universidad de Antioquia.

Ana María Arango. Coordinadora. Corporaloteca. Universidad Tecnológica del Chocó.

Pilar Riaño Alcalá. Universidad de British Columbia. Canadá

Dr Sheila Gruner, Profesora Asociada, NORDIK Institute, Canadá

Marcio Goldman. Professor Titular - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Lucas Marques. Antropólogo. Estudiante de doctorado en Antropología Social Museu Nacional. Universidad Federal de Rio de Janeiro.

Jaime Arocha. Profesor programa de Antropología – Universidad Externado de Colombia

Liliana Gracia Hincapié. Universidad del Valle.

Ana Patricia Figueroa Estrella. RAP Pacífico

Yeison Arcadio Meneses Copete, CADEAFRO, GRENAL, GRELAT y ACIAFROS.

Angela Yesenia Olaya Requene. Research associate, ALARI, Harvard University

Daniel Varela. Antropólogo, Grupo de Estudios Afrocolombianos. Universidad Nacional

Mónica Juliana Chavarro Rodríguez, Universidad del Valle

Sofía Natalia González, Antropóloga. CNMH

Andrea Leiva Espitia, Universidad Santo Tomás.

Giovanny Castillo, Figueroa, Antropólogo. UNAM

Ángela Parra. Profesora área de Cultura – Universidad Externado de Colombia

Ángela Castillo Ardila, Grupo de Estudios Afrocolombianos, UNAL, Universidad de California, Berkeley

Laura De la Rosa Solano. Profesora asistente, departamento de Antropología. Universidad Nacional de Colombia.

Diana Camila Orjuela Villanueva. Trabajadora Social. Universidad Nacional de Colombia.

William Cristancho Duarte. Defensor de DD.HH. Corporación CSOMIANCOL

Yiya Gómez. Viva la Ciudadanía

Dany Gómez. Universidad de Nariño

Jaime Zuluaga Nieto. Universidad Externado de Colombia

Socorro Ramírez. Universidad Nacional

Wilson Acosta Jiménez - profesor del DCS. Universidad Pedagógica Nacional

Pedro Elías Galindo León. Profesor Universidad Nacional de Colombia

Patricia Roza. Ciudadanías por la Paz en Colombia

Angela Emilia Mena Lozano. Programa de Estudios de las africanías- Universidad de Antioquia.

Leidy Catherine Lara - Profesional CNMH

Celia del Pilar Páez, Antropóloga / CNMH

Claudia Tovar Guerra. Grupo Lazos Sociales y Culturas de Paz, Universidad Javeriana.

Bela Henriquez Chacín. Universidad ICESI.

Francisco Alexander Tenorio Quiñones como fundación Casa Tumac Medellín.

Jesús Duran Tellez. Proyecto Memorias Audiovisuales del Atrato y el Pacífico Colombiano (1994-2008)

Dianne Rodriguez. Proyecto Memorias Audiovisuales del Atrato y el Pacífico Colombiano (1994-2008)

María Fernanda Carrillo. Proyecto Memorias Audiovisuales del Atrato y el Pacífico Colombiano (1994-2008)

Marta Dominguez. Proyecto Memorias Audiovisuales del Atrato y el Pacífico Colombiano (1994-2008)

Isabel Restrepo Jaramillo. Proyecto Memorias Audiovisuales del Atrato y el Pacífico Colombiano (1994-2008)

Jefferson Jaramillo Marín, profesor Universidad Javeriana

Mauricio Pardo. Profesor Antropología. Universidad de Caldas.

Diego Cagueñas Rozo. Profesor asistente, departamento de estudios sociales, Universidad Icesi

Daniel Ruiz Serna. Universidad de British Columbia.

Juan Mario Díaz, Investigador Universidad de Sheffield, Inglaterra

Simon Rushton. University of Sheffield, UK